

puntos de vista. Un posicionamiento, débil aún, en contra de la presencia del ejército mexicano en la ciudad. En Juárez, la evidencia apunta a que se trata más de una crítica de grupos derechohumanistas que de células activadas por el propio crimen organizado. En el otro extremo, surge en sectores de la población, y aún en los medios de comunicación, la opinión de la “eficacia” de las operaciones del ejército que al estar mejor entrenados, mejor equipados y menos sujetos a “restricciones civiles” logran dar golpes más contundentes al crimen organizado en términos de número de sicarios muertos. Desde mi punto de vista hay tres ausencias notables:

- La construcción de un amplio consenso y un frente social en contra del crimen, que además impulsen la inclusión de una política de Estado para el desarrollo integral de Juárez en particular y de Chihuahua en lo general, que sean capaces de reconstruir el tejido social fracturado por el abandono estatal y la violencia.
- Un replanteamiento del Estado mexicano que convierta a regiones como Ciudad Juárez, en escenarios de visiones nacionales en las que está en juego la seguridad nacional.
- Claridad sobre el papel que debe jugar la relación México-Estados Unidos. Juárez es muy distinto al resto del país, pero en muchos sentidos es muy similar de la línea fronteriza que se comparte con el “coloso del norte”. Una política de seguridad binacional con dividendos favorables para ambas naciones debería ser la que priorice el desarrollo fronterizo que en puntos como Ciudad Juárez - El Paso son impensables sin considerar “al otro”, por la sencilla razón de que se encuentran entrelazadas por los caprichos de la historia y los avatares del tiempo.

Por ello, visiones marcadas por el uso de la fuerza (de ambos lados de la frontera) y la coyuntura podrán tener efectos favorables en el corto plazo pero el abandono histórico regresará, procreando estos y otros males que oscurezcan los esfuerzos actuales en la “Guerra contra el Narco”.

35. La guerra en la frontera México-Estados Unidos

*Jorge Luis Sierra*¹⁷⁰

La frontera entre México y Estados Unidos está convertida en un campo de batalla por parte de ambos gobiernos. Existe una guerra en contra de poderosas organizaciones

¹⁷⁰ Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C.

de narcotraficantes, las cuales encaran con un creciente poder de fuego y una capacidad corruptora cada vez mayor.

El gobierno del presidente Felipe Calderón está usando al ejército y a la armada de México como su fuerza principal en el combate contra estos grupos, mientras que el nuevo gobierno de Barack Obama está ofreciendo el apoyo tecnológico y de inteligencia de sus fuerzas armadas para engrosar la lucha mexicana. Por su parte, los diferentes grupos de narcotraficantes han logrado conformar una potencia, que el mismo gobierno mexicano estima en 400 mil personas, en la que están mezclados ex policías, desertores del ejército, ex soldados kaibiles del ejército guatemalteco, sicarios de pandillas callejeras y carcelarias de Estados Unidos, y jóvenes de las ciudades fronterizas que están dispuestos a trabajar para el narcotráfico a cambio de dinero y privilegios.

El conflicto armado enfrenta también entre sí a las bandas rivales de narcotraficantes, en una lucha intestina que ha costado la vida de más 6 mil personas ejecutadas en todo el territorio nacional en 2008 y los dos primeros meses de 2009. Es importante destacar que la mitad de esas ejecuciones ha ocurrido en la frontera norte.

La violencia relacionada con el narcotráfico está concentrándose principalmente en los seis estados mexicanos que colindan con Estados Unidos: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En algunas ciudades, las cifras de ese conflicto alcanzan ya proporciones extraordinarias: una tercera parte de las mil ejecuciones que ocurrieron en los dos primeros meses de 2009 en México, sucedieron tan sólo en Juárez, la ciudad hermana de El Paso, Texas.

No sólo los mexicanos padecen los estragos de esa violencia. Hacia enero de 2009, cifras proporcionadas por una empresa privada de expertos en negociación anti-secuestro, indicaron la existencia de 25 ciudadanos estadounidenses secuestrados en el área de San Diego, California, llevados por sus plagiarios hacia Tijuana, Baja California. En tanto, investigaciones periodísticas revelaron que en febrero del mismo año, 172 de los 230 asesinatos de estadounidenses en México, en los últimos cinco años, han ocurrido en las entidades fronterizas con Estados Unidos.

Distintas autoridades estadounidenses, tanto civiles como militares, han manifestado que el ambiente de ingobernabilidad que existe en la frontera con México puede ser aprovechado por terroristas internacionales que tratarían de penetrar su territorio e introducir agentes y armas de destrucción masiva. Analistas del Departamento de Defensa conciben a los gobiernos estatales de México como Estados fallidos, que no pueden ofrecer seguridad a sus ciudadanos y están en riesgo de sucumbir al embate corruptor y violento del narcotráfico.

Las armas utilizadas por la delincuencia organizada provienen de Estados Unidos en 90%. Los Zetas, un grupo de sicarios integrado originalmente por desertores del ejército mexicano, han organizado sus propios pelotones de infantería, armados con fusilería diversa, morteros y lanzacohetes antitanque. En consecuencia, las fuerzas

del gobierno tampoco están escatimando el uso de armamento para enfrentar a narcotraficantes. Además de las armas utilizadas por las unidades del ejército y la armada de México, las policías estatales y algunas municipales están siendo equipadas con granadas y fusiles, que hasta ahora habían sido de uso reservado para las fuerzas armadas.

Algunas operaciones sirven para ilustrar la magnitud del armamento acumulado por las partes en conflicto: Durante una serie de combates en las calles de Reynosa, Tamaulipas, en noviembre de 2008, varias unidades del ejército mexicano abrieron paso a una caravana de militares y policías federales que llevaban detenido a Jaime González Durán, *el Hummer*, uno de los desertores del ejército mexicano que fundaron el grupo de los Zetas. La caravana encontró fuerte resistencia armada que intentó inútilmente poner barricadas en las calles para rescatar a su jefe. Horas después de la detención y su traslado en avión a la ciudad de México, la policía halló uno de los arsenales más importantes que se había decomisado en la historia reciente de la lucha contra el narcotráfico: 500 armas de fuego, medio millón de municiones, 150 granadas, un lanzacohetes antiblindados, dos lanzagranadas de 40 mm, 14 pistolas *five-seven* conocidas como matapolicias por su capacidad de penetrar puertas, carrocerías y chalecos antibalas; además de siete rifles de francotirador Barret calibre 50. Los lanzagranadas de 40 mm han sido utilizados con éxito en otros conflictos armados. Un ejemplo de su capacidad de fuego está en la forma en la que el ejército de Estados Unidos utilizó una versión moderna de esta arma para destruir a compañías de infantería iraquí con ráfagas de unas 350 granadas por minuto a distancias de más de 2 mil metros. Tanto el narcotráfico como el ejército han usado esas armas en sus enfrentamientos.

Este tipo de armas fueron utilizadas durante un enfrentamiento ocurrido en las calles de Reynosa, en febrero de 2009. Los vecinos en una colonia localizada en el suroeste de esa ciudad fronteriza con Hidalgo, Pharr y Mission, Texas, vivieron, en esa ocasión, más de dos horas de una cruenta batalla entre sicarios del Cártel del Golfo y elementos del ejército y la policía federal. Los reporteros de la televisión local, que transmitió en vivo escenas del enfrentamiento, hablaban hacia el auditorio mientras el ruido ambiental reproducía el fuego intenso de granadas y fusiles automáticos. El intercambio de disparos fue realizado a horas del día, cerca de una escuela primaria que estaba en clases y también de un centro comercial en funcionamiento, lo que indica que tanto autoridades como delincuentes involucraron en el enfrentamiento a la ciudadanía, sin importar el riesgo de producir bajas colaterales entre transeúntes, comerciantes y vecinos.

Los narcotraficantes aprovechan la existencia de un mercado de armas abierto, no controlado, en el sur de Estados Unidos. Según el Buró de Armas, Tabaco y Alcohol de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés), los traficantes pasan miles de armas por la frontera hacia México en un contrabando llamado “río metálico” que corre de norte a sur. La misma fuente indicó, que a lo largo de la frontera existen registrados

más de 6,700 vendedores de armas, pero sólo 100 agentes y 35 inspectores de ATF para controlar la legalidad de todas las operaciones de compraventa.

Una parte importante de estas armas pasa de contrabando por parajes del río Bravo. De la misma manera, otra cruza por los puentes internacionales entre México y Estados Unidos. Ejemplo de ello ocurre en el Puente de Pharr, que comunica a esa población fronteriza del sur de Texas con la parte oriental de Reynosa. Según fuentes consulares mexicanas, células de la delincuencia organizada arrancan el cableado eléctrico en el lado mexicano del puente para que éste quede bajo la oscuridad cuando suceden las operaciones de tráfico de armas. Los traficantes perforan subrepticamente la malla ciclónica y los tripulantes de los autos que vienen de Estados Unidos, que logran pasar sin revisión aduanal o policial estadounidense, arrojan los bultos cargados de armas por los huecos de las mallas.

Las detenciones sistemáticas de miembros de pandillas en el lado estadounidense de la frontera, también muestran evidencias de que pandillas estadounidenses están colaborando activamente con los cárteles mexicanos subiendo drogas al norte y bajando armas hacia el sur. La Mafia Mexicana, Hermanos Pistoleros Latinos, Latin King and Queen Nation, Three City Bombers, Texas Syndicate y Barrio Azteca son algunas, las cuales se encargan de “levantar” personas, ejecutar narcos rivales y extorsionar a hombres de negocios en ambos lados de la frontera.

Aunque los más conocidos son los cárteles de Tijuana, Ciudad Juárez y del Golfo, existen una multitud de pequeñas organizaciones que funcionan de manera independiente. La detención y muerte de la mayoría de los hermanos Arellano Félix en los últimos ocho años provocó una atomización del cártel de Tijuana, la diseminación de células delictivas dedicadas principalmente al secuestro y la ejecución de elementos fieles a este clan. La organización general se vio reducida en tamaño y en influencia. Sin embargo, no sucedió lo mismo con su división en partículas menos visibles, pero igualmente peligrosas.

Algunas veces unidas y otras divididas en una lucha intestina atroz, estas bandas han logrado tomar el control de una variedad muy amplia de actividades delictivas que abarcan, además del narcotráfico, el secuestro, la extorsión de empresarios y comerciantes, el tráfico de indocumentados, la prostitución internacional y el asesinato de narcotraficantes rivales, policías, militares y periodistas.

Los gobiernos de México y Estados Unidos intentan retomar el control de la región fronteriza, que los gobiernos locales y estatales no parecen tener. La intensidad de la violencia en la región ha llevado al presidente Felipe Calderón a incrementar el despliegue de fuerza militar en Ciudad Juárez, Reynosa y Tijuana, mientras trata de cortar las rutas del tráfico terrestre de drogas en estados colindantes como San Luis Potosí, Veracruz o Sinaloa. La estrategia de militarización también ha producido el desplazamiento de los mandos civiles de las policías municipales de la zona fronteriza y su sustitución con jefes y mandos militares.

Por su parte, el gobierno estadounidense ha incrementado el número de agentes de la Patrulla Fronteriza, una agencia que cuenta con más de 18 mil elementos, más de la mitad de ellos concentrados en la frontera con México. La agencia federal, que forma parte del Departamento de Seguridad Interna, espera contar con cerca de 20 mil elementos en septiembre de 2009. El entonces presidente, George W. Bush reforzó la vigilancia, en 2006, con el despliegue temporal de 6 mil tropas de la Guardia Nacional para auxiliar a la Patrulla Fronteriza. Durante su gobierno, el Congreso aprobó una ley para construir tramos adicionales de muro en la frontera. En tanto, Rick Perry, gobernador de Texas, preveía a principios de año la movilización de mil tropas de la Guardia Nacional en la zona fronteriza.

La fuerza local sigue debilitada. Los jefes de policía (o alguaciles) de los 23 condados estadounidenses enfrentan dificultades presupuestales para vigilar los territorios fronterizos. Como coordinadores de las fuerzas de tarea para vigilar las Áreas de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas, los alguaciles constituyen la autoridad local más importante en la lucha antinarcóticos. Sin embargo, estos jefes de policía carecen de personal suficiente y la administración de las cárceles en cada condado les absorbe recursos humanos y materiales. En 2007, cuando la Legislatura de Texas definió el presupuesto bianual de seguridad fronteriza, la Coalición de Alguaciles Fronterizos de este lugar se quejó argumentando que la mayor parte de los 100 millones de dólares asignados fueron para contratar a más elementos del Departamento de Seguridad Pública de Texas, y no para los condados. Dicha coalición también mencionó que la policía del condado de Hidalgo, cuyo alguacil no estaba alineado con el gobernador Perry, recibió menos dinero que el resto de los condados, a pesar de que esa es una zona de operación del los Zetas y el Cártel del Golfo.

En los últimos cinco años, dos alguaciles de Texas, uno del condado de Cameron (colindante con Matamoros, Tamaulipas) y otro del condado de Starr (fronterizo con una parte de Reynosa y Miguel Alemán) fueron detenidos bajo la acusación de proporcionar información de inteligencia a los Zetas y participar en el tráfico de drogas. Varios agentes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) también han sido arrestados por sus presuntos vínculos con narcotraficantes.

Del lado mexicano, la fuerza policiaca municipal es débil y no proporciona niveles adecuados de seguridad pública. Sin armamento ni personal suficiente, las policías municipales trabajan con frecuencia para el narcotráfico o no lo tocan. Varios jefes policiales locales han sido ejecutados, lo que constituye una intimidación directa contra todos los agentes de la policía municipal. El narcotráfico ha sido capaz de disolver cuerpos enteros de policía municipal con la pura amenaza de matar a sus elementos.

Como la policía federal tiene la política de no investigar ejecuciones porque las considera homicidios, y por tanto delitos del orden común, no federal, la capacidad

de las agencias de policía estatales para esclarecer cada ejecución relacionada con el narcotráfico está rebasada.

Ninguno de los dos gobiernos tiene fuerza suficiente para vigilar la totalidad de los 3,141 km de frontera, en su mayor parte caracterizada por una franja desértica con clima extremo, que va desde el este de San Ysidro, California, hasta Eagle Pass, Texas. La región fronteriza comprende además 100 km al norte y otros 100 al sur de la línea divisoria, en donde viven 9.6 millones de personas del lado mexicano y 6.5 millones del estadounidense, en su mayoría concentradas en 14 ciudades hermanas. Proyecciones demográficas de ambos gobiernos estiman que en el año 2020 vivirán en la región cerca de 21 millones de personas.

Fuera de esas 14 ciudades, en ambos lados de la frontera existen cientos de pequeñas comunidades rurales cuyos habitantes viven en la pobreza extrema y tienen muy pocas perspectivas de progreso. El gobierno estadounidense considera que 21 de los 23 condados fronterizos están en crisis económica. La situación puede agravarse con los efectos de la recesión estadounidense que comenzó en diciembre de 2007 y con la devaluación del peso mexicano que superó 30% en 2008 y los primeros meses de 2009.

Las características de la región han contribuido para que un número mayor de habitantes de ambos lados de la frontera, particularmente jóvenes, elijan colaborar con la delincuencia organizada. El promedio de edad de los sicarios en Nuevo Laredo y Tijuana, por ejemplo, es de 21 años. Las bandas del narcotráfico han demostrado capacidad para reclutar amas de casa, jóvenes *lumpen* e incluso niños para simular protestas contra la presencia militar. Los líderes criminales de cada localidad también ejercen un control sobre los medios de comunicación, a veces con amenazas, a veces con ejecuciones.

La efectividad de la presencia militar y de la policía federal en las ciudades y regiones fronterizas tiene un carácter meramente temporal. Durante la saturación militar de estas localidades, la actividad de narcotráfico parece disminuir, pese a ello los soldados que entran en roce directo con pobladores, en algunas ocasiones, han terminado baleando y matando a transeúntes y conductores que violan de manera voluntaria o accidental las reglas de un retén carretero. Apenas se van las fuerzas federales, todo vuelve a una normalidad aparente; los habitantes de las ciudades desarrollan su vida, los niños regresan a la escuela, los padres al trabajo, y los narcotraficantes a su negocio habitual: conseguir el paso de las drogas, ejecutar a quienes se oponen o se atraviesan en el camino, controlar el resto de las actividades delictivas y obtener fuentes alternativas de ingreso con la participación en el secuestro y venta de protección a empresarios.

Así, la zona fronteriza es el escenario de un conflicto armado de gran envergadura, pero las autoridades de ambos lados de la frontera se niegan a considerarlo así.